Operación Brasil

Por Lourdes Ábrigo

El 2017 ha comenzado para Brasil, con un panorama que se aleja de las expectativas que sostenían los defensores de un modelo político que se sostiene con precaria legitimidad, como es el caso del Brasil actual.

Si bien las proyecciones indican un modesto crecimiento para este año, las cifras de desempleo han crecido, al tiempo que la crisis económica se profundiza y los escándalos de corrupción continúan sacudiendo al país, amenazando con volver aun más sombrío el panorama económico futuro.

"La enorme trama de corrupción en Brasil parece no tener límites. Y tal apreciación se refuerza, luego de conocerse una nueva fase de investigaciones, que alcanza no solo a la elite política brasileña, sino también de varios países de América Latina."

Y es que el clima político del gigante sudamericano no sólo volvió a convulsionarse, al son de renovadas manifestaciones en contra de las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno de Temer, sino también por los coletazos de la "Operación Lava Jato" que todavía da que hablar. Luego de que se conociera una nueva fase vinculada a las denuncias de ejecutivos de la constructora "Odebrecht" que salpicaron a miembros del gabinete actual del presidente y del Congreso, llegando incluso al propio Temer y sus antecesores Dilma Rosseff e Inácio Lula Da Silva.

Como si tales acusaciones no resultaran suficientes para convulsionar la política brasileña, otro escándalo atravesó al Partido del Movimiento Democrático Brasileño que lidera Michel Temer; la "Operación carne débil"; a partir de la cual se conoció la venta de carne maquillada en mal estado, y con productos cancerígenos, por lo que se ordenó la investigación, no solo de directivos de las empresas cárnicas, sino también de inspectores sanitarios y funcionarios de gobierno involucrados.

El caso Odebrecht que involucra a la clase política latinoamericana

La enorme trama de corrupción en Brasil parece no tener límites. Y tal apreciación se refuerza, luego de conocerse una nueva fase de investigaciones, que alcanza no solo a la elite política brasileña, sino también de varios países de América Latina.

Cuando en el año 2015, se investigaba la causa de Petrobras, la policía brasileña arrestó a uno de los empresarios más poderosos del país; Marcelo Odebrecht, por entonces presidente de la mayor constructora de América Latina.

Durante meses, el empresario se negó a declarar respecto a los sobornos que había pagado a cambio de cuantiosos contratos, desestimando la posibilidad de confesar como contrapartida de una rebaja en su pena.

Sin embargo, una serie de pruebas en su contra

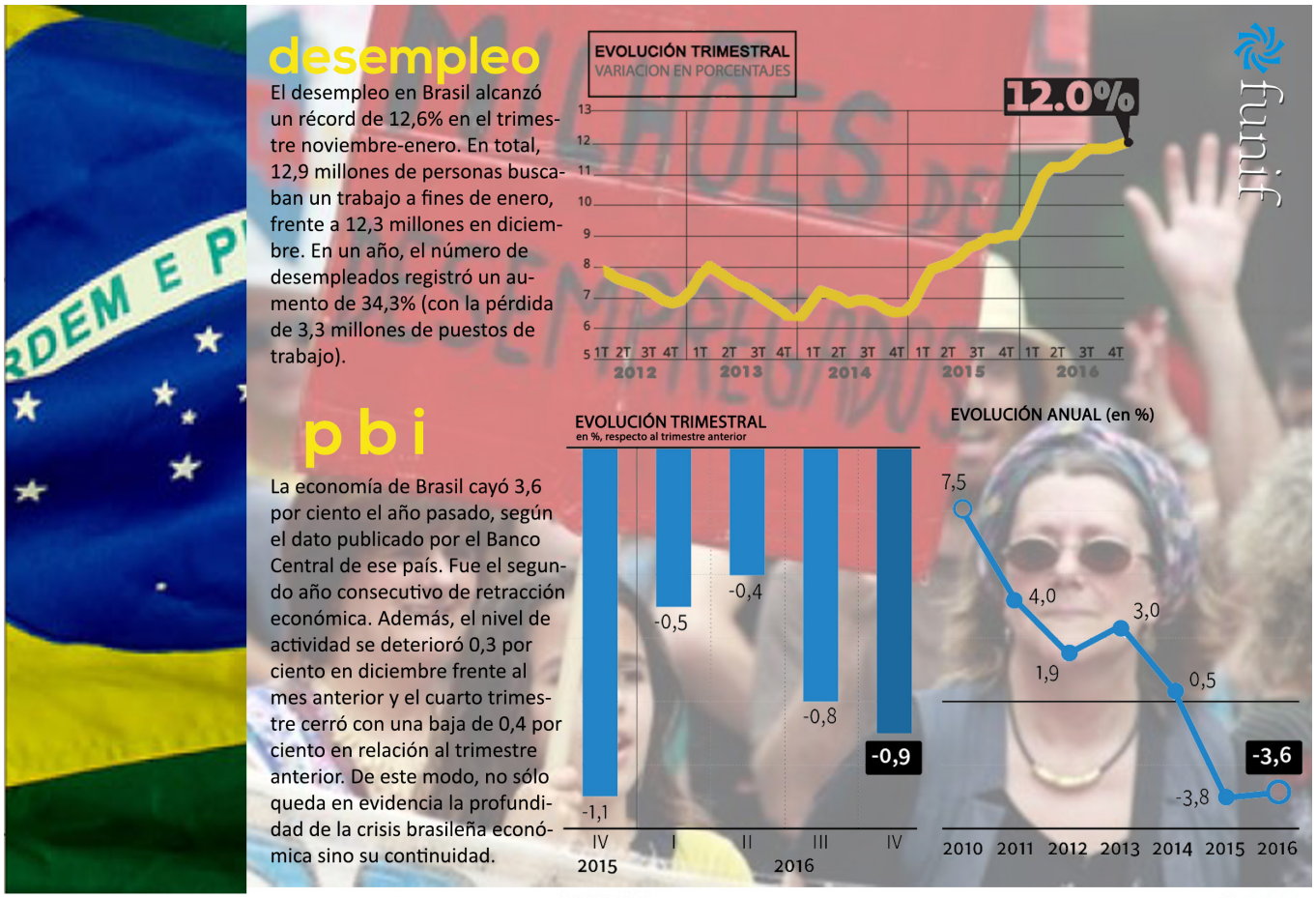
lograron que el empresario modifique su posición y Odebrecht aceptó entonces confesar a cambio de rebajar en 10 años su condena.

Si bien las confesiones de él y de otros 77 funcionarios de la constructora se encuentran bajo secreto de sumario, se ha podido conocer que la firma llevaba adelante un sistemático empleo de sobornos a funcionarios brasileños a cambio de que se favorecieran los intereses de la firma al momento de conceder contratos o incluso, acceder a la modificar leyes. A nivel interno, "Operación Lava Jato" llevó a la condena a prisión por quince años de nada más y nada menos que uno de los arquitectos del Impeachment a Dilma Rousseff; el ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien ya se encontraba en prisión acusado por crímenes de corrupción y evasión fraudulenta de divisas.

A nivel internacional, las confesiones derivaron en la posibilidad de que el pago de sobornos hubiese alcanzado a la campaña del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en el año 2014. En el caso de Perú, la figura del ex presidente Toledo, se vio igualmente involucrada. Acusado de haber recibido 20 millones de dólares, en sobornos de Odebrecht, Toledo no fue sin embargo, el único ex presidente peruano salpicado por la causa. La situación del ex presidente Humala, ya investigado por lavado de activos, ha empeorado debido a una revelación que lo acusó de recibir una suma de la constructora, destinada también a su campaña presidencial.

La lista de países latinoamericanos se amplía con más acusaciones de pago de sobornos a funcionarios de una empresa mexicana, controlada por el Estado, a funcionarios del gobierno de Ecuador y de República Dominicana que recibían estos montos a cambio de beneficiar a la constructora en contratos de obras públicas.

Incluso nuestro país ha sido noticia en esta trama de corrupción. Envuelto en la sombra de Odebrecht, el entorno más directo del Presidente Macri se ha visto afectado cuando apareció el nombre de la firma IECSA, encabezada por Angelo Calcaterra, primo y testaferro del presidente. Asimismo,



iguales acusaciones se dirigieron hacia uno de sus funcionarios; Gustavo Arribas, a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia, quien habría recibido pagos de la constructora brasileña, en gestiones para la adjudicación de las obras para el tren Sarmiento.
Si bien, en este caso, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó al titular de la Agencia Federal de Inteligencia de la investigación que lo involucra, se esperan los resultados de las demás causas, a medida que se avance en los procesos judiciales.

La política económica de la austeridad y el ajuste

Desde sus inicios la "era Temer" ha puesto en evidencia un programa económico basado en la búsqueda de la recuperación de la senda de crecimiento por medio de un severo programa de ajuste que implicó, entre otras medidas, una reforma del sistema de jubilación. La misma prevé imponer una edad mínima de jubilación de 65 años, aun cuando se hayan alcanzado los años necesarios de contribución, modificando la Ley actual que determina la edad en 58 años.
El rechazo de los brasileños a estas medidas, se canalizó nuevamente en masivas manifestaciones que tuvieron lugar en diferentes ciudades a lo largo del país y que marcaron el regreso de la población a las calles en un momento en el que la figura del presidente sigue disminuyendo en popularidad. La respuesta del gobierno frente a las críticas, por su parte, se sustentó en el argumento de que tales reformas son "necesarias para salvar al país del colapso".

Temer y la fragil legitimidad

El gobierno de Temer resiste, y se mantiene a pesar de los embates económicos, de los escándalos de corrupción que no cesan y de la creciente oposición civil. Se sostiene aún con un magro apoyo de la población y con una legitimidad que se sigue cuestionando, precisamente, a fuerza del apoyo del establishment financiero y del Congreso. Un Congreso en el que según la lista dada a conocer por el Supremo Tribunal Federal, 29 de los 81 senadores, y 40 de los 513 de los diputados son sindicados como participes en la causa de corrupción.
Queda esperar por estos momentos, el curso que seguirá el juicio contra la fórmula Rousseff- Temer, por acusaciones en su contra, respecto a una supuesta financiación ilegal de su campaña. De hallarse responsable de tal delito, el presidente brasileño se encontraría ante la obligación de abandonar el poder.
Será entonces momento de darle lugar a los tiempos judiciales, para conocer cuál será el futuro de Temer, a la expectativa de que los avances en las investigaciones, aclaren el rol de cada uno de los actores envueltos en esta trama de corrupción, que ya no es solo brasileña, sino latinoamericana.